

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Antonio Pereira como albacea de la señora D<sup>a</sup> Manuela Valdez, contra el ayuntamiento de Maxcamí que ha ocupado parte del terreno de una casa perteneciente á la testamentaria de dicha señora.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR  
FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El II. ayuntamiento de Maxcamí ha justificado dos hechos sustanciales en este juicio de amparo promovido contra él por haber ocupado un terreno de propiedad particular, violando el art. 27 de la Constitución federal: el hecho de que ese terreno ha sido rematado en pública subasta por D<sup>a</sup> Silveria Pereira; y el de que esta señora, con expreso consentimiento y autorización de su esposo D. Osearino Patron, lo ha cedido espontáneamente á dicho cuerpo municipal para la construcción de un edificio destinado al mercado público de aquella localidad. En presencia de estas constancias ha desaparecido, por una parte, la personalidad con que D. Antonino Pereira intentó el presente recurso; pues aunque en su calidad de albacea, tenía el derecho y el deber de salvar los bienes testamentarios de cualquier peligro de pérdida que les amenazara, intentando al efecto los recursos legales que estuvieren á su alcance, ese deber y ese derecho cesan desde el momento en que los bienes que él considera amenazados de dicho peligro, mas que á la testamentaria de su cargo, pertenecen ya á otra persona quien, para entrar en su dominio pleno, solo espera la sanción judicial del contrato celebrado con el mismo albacea. En tanto que nace, por otra parte, la convicción de que este nuevo propietario, lejos de reputar el acto reclamado aten-

tario de la garantía que otorga el artículo 27 de la carta fundamental de la República, lo considera como una consecuencia natural y justa de la cesión que ha hecho de la cosa que se supone objeto del atentado cometido. Faltando pues, á D. Antonino Pereira la personalidad necesaria para promover este juicio, y no existiendo la expropiación que le sirviera de fundamento, el fiscal pide á vd. resuelva, que la justicia de la Unión no conceda al actor el amparo y protección que solicita contra el II. ayuntamiento de Maxcamí, por haber ocupado un terreno perteneciente á los bienes testamentarios de la señora D<sup>a</sup> Manuela Valdez de quien es albacea, en virtud de que ese terreno ha sido rematado ya en pública almoneda y segregado, por consiguiente, de la testamentaria de su cargo.

Mérida, Diciembre dos de mil ochocientos setenta y uno.—P. Hijuelos.

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

“Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan.”

Mérida, Enero ocho de mil ochocientos setenta y dos.

Visto este juicio de amparo promovido por el C. Antonino Pereira contra el ayuntamiento de la Villa de Maxcamí, como albacea de D<sup>a</sup> Manuela Valdez, por la ocupación de un terreno correspondiente á los bienes de su albaceazgo, con violación del art. 27 de la carta fundamental de la República. Vista la denegación de la suspensión del acto reclamado; el informe justificativo de la autoridad contra quien se dirige la queja; el pedimento fiscal; las constancias mandadas compulsar para mejor proveer y la citación para sentencia, con cuanto mas ver y tener presente convino.

Considerando que aunque el art. 27 de la Constitución nacional está modificado por la ley sobre suspensión de garantías de 2 de Diciembre último, la modificación no

es aplicable al presente juicio, porque se inició antes que fuera dada dicha ley; que el terreno, objeto de este amparo, pertenece á la casa rematada por el C. José Salomé Pereira en 23 de Julio de 1869; que el remate es un contrato de venta y como tal se perfecciona por el consentimiento de los contratantes, sin que sea esencial la aprobación, confirmación, ratificación ó mandato del juez ni que se haya abonado el precio de la cosa, en lo cual están contestes las leyes antiguas y el código civil lo declara en su art. 2946, que dice: "La venta es perfecta y obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas en la cosa y en el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho;" que además, en el presente caso se han pasado dos años y medio desde el día del remate; y por consiguiente, todos los plazos para hacer nuevas pujas, habiendo hasta cedido su remate el rematador á D<sup>a</sup> Silveria Pereira en 3 de Agosto de 1870, cesion que ha puesto la casa rematada en manos de un tercer poseedor, sin que exista constancia de que alguien se haya opuesto á él; de donde resulta, que el albacea no puede usar derechos acerca de la propiedad de la casa rematada. Por estos legales fundamentos y no teniendo personalidad para promover el actor, la autoridad decreta:

Primero; Es de sobreseerse y se sobresece en este juicio.

Segundo; Sáquese testimonio de este fallo para su publicación y clévase los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para su revisión, de conformidad con los artículos 13 y 27 de la ley suprema de 20 de Enero de 1869. Notifíquese.—*I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero catorce de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Antonino Pereira, como albacea de la testamentaria de la Sra. D<sup>a</sup> Manuela Valdez, contra el ayuntamiento de la Villa de Maxcamí, que ha dispuesto de una parte de un solar con casa de mampostería, situado en el ángulo que ve al oriente en la plaza principal de esa Villa; y

Considerando en primer lugar: que el C. Pereira tiene acreditado, que es albacea de la testamentaria, lo cual le da personalidad para representar por ella, y que por lo mismo la falta de personalidad no puede servir de fundamento para sobreseer en este juicio, como por esa falta se manda sobreseer por el juez de Distrito de Yucatan en su auto de 8 de Enero de este año.

Considerando en segundo lugar: que Pereira no ha probado la propiedad en el solar de que en parte ha dispuesto el ayuntamiento de Maxcamí, por lo cual no pueden decirse violadas en el caso las garantías á que se refiere el art. 27 de la Constitución federal, en cuya supuesta violación se funda Pereira para solicitar el amparo, se decreta:

Primero; que se revoca el auto de sobreseimiento pronunciado en este juicio por el juez de Distrito de Yucatan.

Segundo; que la justicia de la Union no ampara ni protege al albacea de la testamentaria de la Sra. D<sup>a</sup> Manuela Valdez, contra el acto del ayuntamiento de la Villa de Maxcamí que ha dispuesto en parte del solar con casa de mampostería situado en la plaza principal de esa Villa en el ángulo que ve hacia el Oriente.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*S. Lerdo de Tejada.*—*José Arteaga.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero diez y siete de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPAIRO.

*De garantías promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan por varios comerciantes de Mérida, contra el C. Gabriel Lujan, rematador del ramo de contribucion impuesta á la venta de licores al menudeo, alegando que los ha embargado, infringiendo algunos artículos constitucionales.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR  
FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El fiscal debe ocuparse en el presente dictámen del punto principal de la solicitud que motiva este expediente contraída á que la justicia nacional que vd. administra, ampare y proteja á los comerciantes que la suscriben contra los actos del rematador del ramo de contribuciones impuestas por el gobierno del Estado á la venta de los licores espirituosos al menudeo; y contra la disposicion del ejecutivo, fecha 23 de Junio de 1868, en que se funda para obligarlos á quitar de sus respectivos aparatos los embaces en que se encuentran dichos licores como muestras de los que no les está prohibido vender al por mayor. Los peticionarios apoyan su ocurno en los artículos

14, 16, 22 y 27 de la Constitucion, y en el 1º, fraccion 1ª, de la ley suprema de 20 de Enero de 1869.

El informe que sobre este punto ha rendido el funcionario responsable, despues de haber sido resuelto negativamente el de la suspension inmediata de los actos reclamados, que desde luego promovieron los quejosos, no destruye el fundamento esencial de su solicitud; pues aunque el infrascrito no convieno en que se hubiesen violado todos los artículos del pacto federal que se citan, y con ellos las garantías individuales que protegen, sí cree que se ha infringido el 16: lo cual es bastante para otorgar el amparo invocado. Y en efecto, suponiendo que la enunciada disposicion de 23 de Junio tuviese toda la fuerza obligatoria de que carece por haberla dictado el ejecutivo del Estado en pleno periodo constitucional, y no hallarse comprendida entre los actos de él aprobados por decreto de la II. legislatura, expedido en 17 de Julio del mismo año 1868, ni en ese caso podria considerarse exenta de la anticonstitucionalidad que se le atribuye; porque autoriza á un simple rematador á molestar en sus posesiones á cualesquiera de los quejosos, lo mismo que á todo ciudadano que se encuentre en el caso de ellos, toda la vez que se le antoje suponer que en los frascos ó botellas de su establecimiento se encuentran licores espirituosos destinados á su venta por menor; pues en virtud de esa facultad se entregaria, siempre que quisiese á practicar una visita domiciliaria, una verdadera requisicion, haciendo abrir embaces sospechosos para cerciorarse de que el líquido no entra en la nomenclatura de los perseguidos. Y esta molestia, que es de las mas grandes que el individuo puede sufrir en sus posesiones, al mismo tiempo que en su persona pues que los distraeria algunas horas de otros trabajos mas provechosos en el ejercicio de su industria, se verificaria sin las formalidades prescritas para estos casos por el art. 16 de la Constitucion;